

Activismo (*advocacy*) e incidencia política desde archivos y bibliotecas

Un debate necesario para las
instituciones de la memoria

SARA MARTÍNEZ CARDAMA

Este artículo aborda el concepto del *advocacy* (activismo) desde la perspectiva de las instituciones patrimoniales como bibliotecas y archivos. Plantea la necesidad, valores y papel del activismo ante los retos de nuestra época. Tras dejar constancia de que en España el activismo en este campo es casi testimonial, la autora propone un decálogo de medidas para una mayor influencia en la esfera pública.



Imagen de la manifestación, bajo el lema «Occupy Wall Street», a la que alude la autora del artículo.

Foto: ©Wikimedia.

Los archivos y bibliotecas constituyen instituciones que han acompañado al ser humano en la custodia y preservación de su legado, de sus hazañas y acontecimientos. Estos «fieles testigos» constituyen espacios para la democratización de la cultura y el saber y grandes baluartes en la construcción de la memoria colectiva y la democracia. En la actualidad, como espacios sociales han de ser agentes esenciales de debate y transformación social ante los retos de la sociedad actual. A pesar de su importancia, no se caracterizan por el desarrollo de campañas o estrategias que fomenten el activismo o «incidencia política» para influir de manera directa en políticas públicas.

Hay una imagen que se ha viralizado a través de las redes. Representa a una manifestante del movimiento «Occupy Wall Street» de 2011 que porta una pancarta en la que puede leerse «You know things are messed up when li-

brarians start marching» («Sabes que las cosas están complicadas cuando los bibliotecarios comienzan a manifestarse»). Este mismo texto se ha reproducido en infinidad de protestas sociales posteriores (en defensa de los derechos de la mujer y el feminismo, contra las políticas del presidente Trump o en el movimiento #Blacklivesmatter.

Esta frase simboliza el carácter «tranquilo» que ante la sociedad parece el colectivo profesional de bibliotecarios y archiveros. La neutralidad de las instituciones de la memoria en la selección y formación de sus colecciones y en garantizar el igualitario acceso a la información, ha sido malinterpretada para evitar posicionarse ante cuestiones que son vitales para la ciudadanía. Las directrices internacionales de organismos con competencias en la materia avalan y reivindican el papel social de bibliotecas y archivos, y los definen como un espacio esencial y ancla para sus comunidades. No obstante, ¿se refleja esto en las políticas públicas a nivel nacional, regional o local?, ¿tienen capacidad de decisión y de alzar la voz ante cuestiones de interés? La respuesta es, tristemente, negativa.

Las estrategias de *advocacy* e incidencia política muestran cómo a través de la capacidad de influencia y la comunicación constante con los agentes de decisión (políticos, legisladores) pueden obtenerse grandes logros para sectores de interés que ayuden a visibilizar y elevar cuestiones en la agenda pública. Estas estrategias de planificación de la actividad bibliotecaria y archivera son prácticamente desconocidas, representando sus manifestaciones algo fruto de la improvisación. ¿Pueden permitirse bibliotecas y archivos seguir siendo un «rara avis» dentro del

activismo? Hay cuestiones de nuestro día a día que están imbricados en las propias raíces de estas instituciones: la lucha contra la desigualdad, el cuestionamiento actual y debilitamiento de los valores democrático, la posverdad y la

manipulación de la historia y de la información, el escenario complejo y reciente marcado por la pandemia del coronavirus... Todos estos retos suponen una oportunidad de oro para reivindicar el papel de archivos y bibliotecas en la esfera pública, haciendo valer su posición. De lo contrario puede perderse este tren para siempre, e incrementar la desconexión de la profesión y sus retos con la ciudadanía.

Las directrices internacionales de organismos con competencias en la materia avalan y reivindican el papel social de bibliotecas y archivos

ADVOCACY NO ES SOLO MANIFESTARSE

La palabra *advocacy* constituye un anglicismo complejo y difícil a veces de acotar. Frecuentemente se traduce por activismo o incidencia política. Otras veces se asocia al entorno del *lobby* y cabildeo. No obstante, constituye una realidad más compleja. Proviene del *advocare* latino, y significa literalmente «abogar por», esto es interceder en favor de alguien o algo. Diccionarios de lengua inglesa como *Cambridge* lo definen como el «apoyo público a una idea». No obstante, el mero apoyo a una idea no implica *advocacy*. Es preciso crear un clima de opinión favorable a ese cambio.

Por tanto, puede definirse como un proceso social complejo en el que intervienen diferentes actores, actitudes, relaciones sociales entre el grupo y con los espacios de po-

der que refuerza la sociedad civil y abre nuevos espacios democráticos y de diálogo. Constituye un trabajo de planificación, de trabajo con la comunidad y agentes de interés (*stakeholders*) para guiarles hacia un asunto de interés y una vez, construida esta relación tratar de influenciar a los agentes de decisión (legisladores). *Advocacy* por tanto implica la construcción de relaciones, el debate y la influencia.

Hay algunos errores e ideas preconcebidas en el concepto de *advocacy*. En primer lugar, su identificación reduccionista con el ámbito de la protesta, o, por el contrario, solo con el *lobbismo*. Ambas son solo dos estrategias dentro del concepto de *advocacy*.

Es preciso ahondar en el concepto del cabildeo, ya que a pesar de que un *lobby* puede ser cualquier organización social, se asocian a asociaciones empresariales poderosas que tratan de influir en los gobiernos. Estas percepciones siguen vigentes. El informe sobre España financiado por la Comisión e impulsado por Transparencia Internacional España con el título de «Una evaluación del *lobby* en España. Análisis y propuestas» destaca todavía la falta de control y transparencia del sector, la percepción negativa de la sociedad española y conexiones con malas prácticas de corrupción o relaciones con el sector público como las puertas giratorias (Villoria, 2014).

Esta mala fama del entorno del *lobby*, a pesar de que a tenor del informe no se conocen casos en los que lobistas profesionales hayan estado implicados en corrupción, hace que se desconfíe no solo de estas técnicas de presión, sino en general de cualquier relación con el entorno político.

Hay que señalar, la existencia de un tipo de lobby indirecto, de especial interés para el *advocacy*, denominado *lobby* desde la base o *lobby grassroot*. Su popularidad es creciente en los últimos años generando

una atención política mayor que otras acciones de influencia más tradicionales. Consiste en movilizar a terceros para generar un apoyo público a una causa. Este tipo de actuaciones dota de mayor representatividad y legitimidad a la causa, ya que es más transparente y menos agresivo que las técnicas tradicionales.

Dice el anecdotario que, en una ocasión, el presidente Franklin D. Roosevelt contestó a un grupo de reformistas con quien se entrevistó: «Muy bien, ya me habéis convencido, ahora salid a la calle y presionadme». El *advocacy* constituye la planificación consciente de esa presión social. No es solo protesta, no es solo *lobbismo*, ni captación de fondos, es todo eso y mucho más. Una filosofía consciente y no espontánea de planificar los recursos (humanos, económicos...) hacia la consecución de un objetivo que beneficie a la institución y su comunidad. Para ello, es preciso realizar un proceso de autoconocimiento.

Uno de los problemas de la profesión bibliotecaria y archivera ha sido dar a conocer el valor añadido que ofrecen estas instituciones

QUIÉNES SOMOS Y CÓMO NOS VEN

El activismo en bibliotecas y archivos constituye la defensa pública de los valores que siempre han sido esenciales en las unidades de información. Es importante la defensa de este sistema de valores que las ha hecho pervivir en

el tiempo y que debe ser el corazón de una estrategia de *advocacy*, sin olvidar, por supuesto las nuevas funciones y actividades que han ido asumiendo.

Diversos autores han reivindicado el activismo desde bibliotecas y archivos. Así, Haycok (2011) lo realiza desde la necesaria planificación, como un esfuerzo deliberado, planeado y basado en estrategias de acción concretas. Hackman (2011), reconocido investigador y activista en archivos, lo define como una inversión, un proceso necesario para la profesión para concienciar e implicar a otros individuos y organizaciones para que conozcan y apoyen nuestro trabajo. Por su parte, Cavill (2011) habla de un proceso lento y deliberado de incrementar la conciencia social y posterior apoyo a una causa. Constituye la aplicación de «técnicas de marketing a un tema», diciéndole a quien toma las decisiones, a sus socios y a los diferentes *stakeholders* que «lo que tenemos que ofrecer mejorará la agenda pública». Y aquí se encuentran los principales escollos de la profesión bibliotecaria y archivera ante el *advocacy*, que pueden resumirse brevemente en: la reivindicación clara de sus valores, el desconocimiento o conocimiento parcial de un sector de la población no usuaria, la falta de instrumentos normalizados y estadísticas completas que permitan realizar una evaluación de los servicios y la dificultad de la profesión para establecer relaciones dentro del ámbito político. Todo ello, se desarrollará a continuación.

Las bibliotecas y archivos son instituciones con gran reputación social, que han democratizado su imagen de origen marcada por ser un bastión elitista y académico (Stielow, 2001) para ser institucionalizadas por sus valores

democráticos de acceso igualitario a la información y educación ciudadana. Esta reputación puede verse en diversos estudios, como en los datos del *Pew Research Center* sobre

«Sabes que las cosas están complicadas cuando los bibliotecarios comienzan a manifestarse»

la confianza de los estadounidenses en sus instituciones. Ante la pregunta «¿En qué institución pública confían los estadounidenses más para la obtención de información?», las bibliotecas ocuparon el primer lugar, por encima de otras fuentes personales o institucionales.

He aquí la gran paradoja: pese a su gran reputación (nadie generalmente se posiciona totalmente en contra de las bibliotecas o archivos), sus valores atemporales e históricos se ven cada cierto tiempo puestos en tela de juicio por razones puramente económicas o tecnológicas. Un ejemplo es el papel que han de desarrollar ante la tecnología, y el debate sobre la pérdida en la tradicional infomediaria en el acceso a la información, una misión que, a priori, desde buena parte de la ciudadanía puede no tener sentido en la era Google, pero que las bibliotecas han sabido reorientar a través de la Alfabetización Informacional en la formación de competencias informacionales y digitales. Lo mismo sucede con la labor de los archivos históricos, que en la vorágine de las *fake news* deberían ser la primera fuente para aclarar y verificar eventos pasados, pero que la vorágine viral digital mantiene en un segundo plano. Estas competencias son esenciales en esta época en donde los desórdenes informativos derivados de la llamada posverdad provocan problemas sociales o políticos generados por los grandes sesgos

en el acceso a la información y a los hechos históricos. Por tanto, puede verse como esa nueva labor infomediaria es más esencial que nunca, aunque no exista una percepción social sobre la necesidad de la implicación de bibliotecas y archivos en esta labor, relegada en la actualidad casi en su totalidad al ahora llamado «Periodismo de verificación».

¿Por qué, entonces, si las bibliotecas y archivos no tienen enemigos declarados a priori, ningún grupo social en contra y el cierre de estos espacios es siempre impopular, son cuestionadas? Quizá no exista una oposición fuerte, pero tampoco una percepción real sobre su valor y las funciones que desarrollan como servicio público. Uno de los problemas de la profesión bibliotecaria y archivera ha sido dar a conocer el valor añadido que estas instituciones ofrecen. Para ello, es preciso que los valores fundacionales de bibliotecas y archivos no se vean desdibujados por un planteamiento y debate constante por parte de la profesión sobre la «reinención del concepto de biblioteca» o la reformulación de nuestra esencia y que cuestiones como el acceso a la cultura y conocimiento, la educación y la vocación de servicio al bien común nunca se vean relegadas a un segundo plano y guíen siempre la necesaria transformación de estos centros.

Por tanto, no perder de vista la comunicación de nuestros valores es esencial para una propuesta efectiva de activismo. Son varias las asociaciones y autores que han listado los valores fundacionales esenciales a tener presentes en el proceso de planificación de una estrategia de *advocacy*. Así, Gorman (2015), identifica ocho: la libertad de expresión, la protección de la privacidad, apoyo a la

alfabetización, la defensa de la igualdad, el fortalecimiento de la democracia y su vocación de servicio. Este último valor, esencial, el de «estar para cuando se le necesita», es quizá el más desconocido por muchos ciudadanos que ven solo a estas instituciones como

meras preservadoras y difusoras de la cultura escrita. Por su parte, la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) añade cuestiones como garantizar el bien común y la responsabilidad social. En el caso de los archivos, autores como Greene (2009) ya apuntaban a la necesidad de huir del perfil bajo y demasiado conservador de la profesión incorporando como valores esenciales de los archivos el incremento de la fuerza social de la profesión y el activismo a otros más tradicionales como su servicio a la democracia, la preservación o su papel auxiliar a la Historia.

Los valores vistos avalan la necesidad de activismo de la profesión archivera y bibliotecaria, algo de lo que se rehúye desde el sector, por miedo a posicionarse y perder esa neutralidad que se confunde en ocasiones con equidistancia. Este silencio, genera, en opinión de esta autora, un colectivo profesional silenciado y salvo excepciones, debilitado, con escasa proyección pública. Posiblemente la total dependencia de las Administraciones y fondos públicos dificultan una relación más horizontal con el poder político. A esto se une la desconfianza y desconocimiento de cómo establecer relaciones a esos niveles. Todo ello dificulta las tareas de in-

El presidente Franklin D. Roosevelt contestó a un grupo de reformistas con quien se entrevistó: «Muy bien, ya me habéis convencido, ahora salid a la calle y presionadme»

cidencia política que se caracteriza fundamentalmente por la construcción de relaciones y confianza.

Una de las cuestiones clave en la defensa de los valores de biblioteca y archivos, es, como se ha mencionado, dar por sentado que toda la población conoce lo que se hace en ellas. En general, los estudios del sector se orientan a la población «usaria»: aquella que nos conoce y nos quiere. Son muchas voces desde la literatura especializada en *advocacy* las que critican los discursos basados solo en el «amor a bibliotecas y archivos». Algunas campañas basan su estrategia de comunicación en reivindicar estas opiniones, muchas veces simplistas y poco prácticas a efectos de influencia.

No obstante, suele ser habitual en el sector ante la falta de estudios públicos y transparentes sobre la realidad de quiénes son realmente nuestros usuarios y, sobre todo, cuáles son las percepciones reales de aquellos que no nos conocen o utilizan. El desarrollo de estudios sobre percepción se limita, salvo excepciones, a estadísticas muy tradicionales sobre usuarios fundamentalmente.

¿Con qué datos se cuenta en España sobre nuestras instituciones? Tomando como ejemplo la reflexión de Lázaro-Rodríguez (2019), estudios como el *Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España* ofrecen datos realmente básicos y difíciles de interpretar sobre la utilización de las bibliotecas. Los datos muestran el desconocimiento sobre el uso real (de que un porcentaje de la población tenga el carnet de la biblioteca no se infiere nada...) y un excesivo triunfalismo, ya que realmente es difícil interpretar los datos al obtenerse solo de un 32% de la población española. Lo mismo sucede con los datos estadísticos sobre Archivos

de Titularidad Estatal, por ejemplo. Conocer más al detalle percepciones de usuarios y no usuarios ayudaría a poder tener información «en bruto» de calidad para poder diseñar campañas efectivas de activismo.

El *advocacy* se caracteriza por esta labor previa de investigación: conocer nuestro entorno de influencia, la comunidad a la que servimos y nuestros principales aliados. Por ello, es interesante resaltar estudios como el llevado a cabo por ALA y OCLC titulado *From Awareness to Funding: Voter Perceptions and Support of Public Libraries in 2018* ya que revelan datos esenciales sobre actitudes ante estos centros sobre todo en cuestiones de financiación. Algunas de las cuestiones relevantes que pueden detectarse en este tipo de estudios es que en ocasiones el compromiso con las bibliotecas y archivos proviene en muchos casos de gente que no es usuaria de los mismos, pero está movilizada socialmente y las considera un bien público esencial. En general también se puede percibir un desconocimiento de la financiación de las bibliotecas (muchos de los encuestados desconocían que se financiaban con fondos locales, por ejemplo), lo que puede conllevar a una menor percepción de urgencia en su financiación comparándolo con otros servicios como bomberos, el servicio de salud, la policía o las escuelas.

Otro tipo de estudios eficaces son los basados en los cálculos de rentabilidad del dinero invertido en estas instituciones, que ayudan a incrementar la percepción sobre los centros. Un ejemplo es la campaña de ALA titulada *Quotable facts* que ayuda a entender el retorno mediante afirmaciones sorprendentes como que los americanos gastan tres veces más en aperitivos que lo que les cuestan sus

bibliotecas públicas y que gastan unos 25 dólares al año en ellas, el precio de un libro. A cambio, de media, reciben prestados seis.

En España este tipo de mensajes no se dan todavía de manera tan directa. No obstante, los estudios del retorno de la inversión económica en bibliotecas han sido comunes en los últimos años, especialmente durante la crisis económica. Un ejemplo es el llevado a cabo en 2014 por FESABID titulado *El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas* (Gómez-Yáñez, 2014), donde una de las principales conclusiones que extraía fue que de cada euro que aporta el ciudadano para las bibliotecas se devolvía hasta 3,40. En los archivos las menciones a la rentabilidad social en estos términos no son frecuentes, solo destacando el estudio pionero sobre financiación de archivos *Funding the Archive Sector: Research Report* en el que se ponía de relieve su dificultad para la captación de fondos y se destacaba el *advocacy* como un elemento a mejorar dentro de la profesión animando a las organizaciones a buscar mecanismos para la mejora de las relaciones para hacer más entendible el retorno de la inversión en archivos.

¿QUE TODO CAMBIE PARA QUE TODO SIGA IGUAL?

Esta frase originaria de Lampedusa en la novela «El Gatopardo» puede reflejar la necesidad de que, en el futuro próximo, debamos realizar cambios en nuestra manera de actuar y nuevos mecanismos de aproximación a la ciudadanía no solo ya para mejorar sino para garantizar la vital permanencia de nuestras instituciones. Dar por sentada la confianza de los ciudadanos es un error. Hoy día el *advocacy*

en bibliotecas y archivos se ha vuelto esencial para garantizar lo que tenemos, ante la constante polarización que vivimos que degrada valores e instituciones públicas a su paso.

Las principales asociaciones internacionales de bibliotecas y archivos, IFLA e ICA a nivel internacional, y en el marco estadounidense la Asociación Americana de Bibliotecas y la Sociedad de Archivos de Estados Unidos, al igual que la inglesa CILIP realizan constantes declaraciones y campañas para incrementar la visibilidad de las bibliotecas y archivos y también su poder de influencia. Es preciso recalcar su larga tradición como grupos de presión (la oficina de ALA en el Capitolio data de 1945, por ejemplo). Poseen centros de acción directos para el contacto con representantes políticos y conseguir el apoyo a ciertas causas o leyes. En el ámbito español, la tradición activista en bibliotecas y archivos es prácticamente inexistente, con iniciativas bastante tímidas, poco coordinadas y limitadas en el tiempo. Aunque han existido campañas de comunicación pública, estas no se han realizado bajo el paraguas del *advocacy*, y tampoco se dispone de documentación que haya evaluado su ejecución o resultados.

La autora, a tenor de la bibliografía y experiencias analizadas, propone las siguientes propuestas, en forma de decálogo:

1. Mayor cohesión en el asociacionismo y en la masa crítica profesional española. No solo en las propias federaciones de asociaciones sino entre colectivos de bibliotecas y archivos entre sí. Las características y problemas suelen ser menos diferentes de lo que se cree en

ambas instituciones y la unión es siempre efectiva para elevar problemas en la agenda pública.

2. **Planificación de la estrategia de *advocacy*.** Muchas campañas se han debilitado por perder el foco de las cuestiones que se reclaman. Así, Gallo-León (2019) señala como ejemplo la que fue, quizá la mayor campaña de movilización de bibliotecas en España, basada en la oposición a la transposición de la directiva europea sobre el préstamo de pago en bibliotecas (*#noalpréstamodepago*). Según este autor, su inicial éxito (consiguió espacio en los medios, adhesión de escritores de relevancia...) se diluyó por falta de iniciativas para adaptar la normativa a la realidad española, como al final terminó sucediendo. Lo mismo sucedió con la «Marea amarilla» contra los recortes, que terminó por diluirse en reivindicaciones de otros colectivos. En este sentido, es preciso evitar acciones espontáneas finalistas. Muchas de las campañas se plantean para evitar mermas en la financiación de archivos y bibliotecas, pero generalmente se realizan tarde y sin tiempo de reacción.

3. **Construcción de relaciones.** No solo con nuestro entorno, sino construir aliados en colectivos que pueden ser favorables a nuestras causas.

4. **(Auto) conocimiento.** El *advocacy* exige un ejercicio honesto de autoconocimiento sobre quiénes somos y también un aprendizaje del entorno. Para ello, se necesita investigación previa basada en datos estadísticos más completos que permitan conocer la percepción y uso real que se tiene.

5. **Clara identificación de prioridades** a través de una Agenda Pública. Asociaciones como la Sociedad de Archi-

vos norteamericanos, por ejemplo, establece una agenda bianual en materia de *advocacy* en áreas de las Políticas públicas como el acceso a la información, aspectos sobre *Copyright* y dominio público, la mejora de la financiación o de su autoridad ante las diversas instituciones nacionales o federales.

6. Transparencia. Muy vinculado a lo anterior es la transparencia de los objetivos, acciones y resultados de las campañas. Especialmente de este último, ya que es frecuente que no exista documentación evaluativa sobre las mismas.

7. Formación en técnicas de *advocacy*. La formación de archiveros y bibliotecarios requiere de incorporación de este tipo de estrategias, ausentes por ahora en los currículos académicos.

8. Nuevas técnicas de Comunicación. Es esencial que las instituciones de la memoria comiencen a aplicar técnicas específicas habituales en la comunicación de campañas de *advocacy* como son la construcción de mensajes basados en *storytelling*, elaboración de eslóganes efectivos, preparación de la comunicación con los responsables políticos (mediante la utilización de técnicas como el *elevator Pitch*...).

9. Mayor presencia social. Esto exige el abandono de cierto perfil bajo de la profesión bibliotecaria y archivera, un asociacionismo más cohesionado y un debate sobre los auténticos «elefantes en la habitación» que suelen ignorarse.

10. Rapidez de actuación. Teniendo claro y presente la incorporación del *advocacy* en los planes estratégicos de

las instituciones y asociaciones, y definidas las líneas de acción resulta más sencillo actuar cuando existen cuestiones ante las que se espera nuestra posición. Un ejemplo reciente es el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ante estos hechos, la Asociación Americana de Bibliotecas lo calificó rápidamente y sin tibieza de «terrorismo doméstico» llamando a la profesión al activismo en la defensa de los principios democráticos y los derechos constitucionales. Por su parte, los *National Archives*, máximo responsable de garantizar el registro y acceso de la documentación del Gobierno (responsable de publicar las actas del Congreso y las proclamaciones presidenciales, por ejemplo), a través de su director, manifestó el orgullo en garantizar el orden constitucional y especialmente reivindicó su rol en el histórico traspaso de poder entre administraciones.

La pandemia del covid puede constituir el enésimo tren que las bibliotecas y archivos pueden dejar pasar. Si bien, durante el confinamiento, estas instituciones realizaron grandes campañas a favor de garantizar la cultura en casa, mediante la apertura de colecciones, seminarios, talleres *online* y sobre todo el acceso a servicios de libro electrónico de manera generalizada. La vuelta a la normalidad ha supuesto una limitación muy restrictiva en cuanto a los espacios físicos y la organización de actividades, en muchos casos más reducidas que en otras instituciones culturales como museos, por ejemplo. La desconexión de los espacios físicos con sus comunidades es un reto que las instituciones deben enfrentar, y el *advocacy* es la herramienta para hacer valer su valor en esta época compleja.

Tal vez el activismo en 2021 pase por aplicar nuevas fórmulas de comunicación para mantener estos espacios que no deben darse nunca por sentados. Las bibliotecas y archivos deben alzar la voz para decir lo que son y han venido siendo desde siempre, sin tapujos ni complejos. Solo así, luchando de manera efectiva para que esto se mantenga, puede posteriormente que vaya hacia mejor. ■

Sara Martínez Cardama es profesora de Ciencias de la Documentación en la Universidad Carlos III.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GALLO-LEÓN, José Pablo. 2019. Aproximación a la relación entre bibliotecarios y políticos: un caso específico de la compleja relación entre las esferas política y administrativa. En LAZCANO, RAFAEL (ed.) *Intellectum valde ama. Ama intensamente la inteligencia: Homenaje al Profesor Octavio Uña Juárez, Catedrático de Sociología y Filosofía, escritor y poeta, 1550-1564*.
- GREENE, Mark. 2009. «The Power of Archives: Archivists' Values and Value in the Postmodern Age (with an Introduction by Dennis Meissner)». *The American Archivist*, 72(1), 13-41.
- HACKMAN, Larry J. 2011. *Many Happy Returns: Advocacy and the Development of Archives*. Society of American Archivists
- HAYCOCK, Ken 2011. Advocacy revisited: newer insights based on research and evidence. *World Libraries, River Forest*, v. 19 (1-2)
- LÁZARO-RODRÍGUEZ, P. (2020). «Bibliotecas y efecto Pigmalión: la importancia de la interpretación de resultados y otras cuestiones metodológicas a partir de una crítica al Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España de 2019». *Anuario ThinkEPI*, 14 <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2020.e14b01>
- RAY, Louise, SHEPHERD, Elizabeth, & LAPERDRIX, Marie 2012. *Funding the archive sector: Research report*. The National Archives and the International Centre for Archives and Records Management Research and User Studies.
- STIELOW, Frederick 2001. «Reconsidering Arsenals of a Democratic Culture: Balancing Symbol and Practice». En: KRANICH, Nancy. *Libraries & Democracy: The Cornerstones of Liberty*. American Library Association, 3-14.
- VILLORIA, Manuel (dir.) 2014. *Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas*. https://webantigua.transparencia.org/es/estudio_lobby/spain_lobbying_esp_final.pdf